

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO 2023-0-87, RELATIVO AL SUMINISTRO DEL MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE DETERMINACIONES ANALÍTICAS DE DETECCIÓN DE VIRUS RESPIRATORIOS MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL EN EL SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ.

El Director Gerente del Hospital Universitario "La Paz", en función de las atribuciones conferidas por la Resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, de 13 de septiembre de 2021, sobre delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (B.O.C.M. nº 222 de 17 de septiembre), expone:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Mediante resolución de fecha 3 de abril de 2024, del Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, se acordó la adjudicación del procedimiento abierto 2023-0-87, cuyo objeto es el "suministro del material necesario para la realización de determinaciones analíticas de detección de virus respiratorios mediante PCR", a las siguientes empresas e importes: para un periodo de ejecución de 12 meses

Nº lote	NIF adjudicatario	Nombre o razón social adjudicatario	Importe adjudicación (sin IVA)	IVA (21 %)	Importe adjudicación (con IVA)
1	B63929368	FUJIREBIO IBERICA, S.L.	103.657,05 €	21.767,98 €	125.425,03 €
2	B88063722	CEPHEID IBERIA, S.L.	687.000,00 €	144.270,00 €	831.270,00 €
3	B19537844	VIRCELL SPAIN, S.L.	156.545,00 €	32.874,45 €	189.419,45 €
IMPORTE TOTAL			947.202,05 €	198.912,43 €	1.146.114,48 €

Dicho contrato entró en vigor el 25 de abril de 2024, hasta el 24 de abril de 2025.

SEGUNDO.- Mediante Resolución de 3 de diciembre de 2024 del Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, se aprobó la modificación del contrato derivado del presente procedimiento con la empresa CEPHEID IBERIA, S.L., por un importe adicional de 166.254,00 euros, manteniendo su vigencia hasta el 24 de abril de 2025, conforme al artículo 204 de la Ley 9/2017.

TERCERO.- Con fecha 12 de febrero de 2025, el Órgano de Contratación autorizó la primera prórroga del procedimiento, al amparo de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el apartado 16 de la Cláusula 1 del Capítulo I del

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, respecto de las siguientes empresas y por los importes que se indican:

NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con 21 % IVA)
B63929368	FUJIREBIO IBERICA, S.L. (Lote 1)	103.657,05 €	125.425,03 €
B88063722	CEPHEID IBERIA, S.L. (Lote 2)	687.000,00 €	831.270,00 €
B19537844	VIRCELL SPAIN, S.L. (Lote 3)	156.545,00 €	189.419,45 €

El plazo de ejecución de la prórroga 1ª es de 12 meses desde el 25 de abril de 2025 hasta el 24 de abril de 2026.

CUARTO.- Que con fecha 15 de diciembre de 2025, se recibe en el Servicio de Contratación Administrativa, Memoria justificativa para modificación contractual del PA 2023-0-87 al amparo del artículo 205 de la Ley 9/2017, firmada por el Jefe de Servicio Microbiología y Parasitología del Hospital Universitario La Paz y a través del Servicio de Suministros.

QUINTO.- Con fecha 19 de diciembre de 2025 se otorgó trámite de audiencia al contratista, mediante notificación practicada a través del Portal Corporativo de la Comunidad de Madrid, sin que se hayan formulado alegaciones una vez transcurrido el plazo concedido al efecto.

SEXTO.- En fecha 19 de enero de 2026 la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, emite informe preceptivo nº 5/2026 donde se pronuncia favorablemente sobre la presente modificación basada en el tenor del artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Las infecciones respiratorias agudas presentan sintomatología similar independientemente del agente causal, lo que dificulta el diagnóstico diferencial basado únicamente en la clínica. La disponibilidad del material objeto de la presente modificación contractual, detección mediante PCR en tiempo real de los virus influenza A y B virus respiratorio sincitial (VRS) y SARS-CoV-2 en un tiempo menor a 60 minutos, permite un diagnóstico etiológico preciso y precoz, facilitando la toma de decisiones clínicas inmediatas, el inicio de tratamientos antivirales cuando estén indicados y la evitación de tratamientos innecesarios.

Su utilidad es especialmente relevante en urgencias hospitalarias, pediatría, UCI y en pacientes vulnerables. El diagnóstico rápido de los principales virus respiratorios permite aplicar de forma precoz medidas de aislamiento adecuadas, reduciendo el riesgo de transmisión nosocomial y favoreciendo el control de brotes epidémicos.

En virtud de lo anterior y al amparo del artículo 203 de la LCSP los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público, durante su vigencia y cuando se de alguno de los siguientes supuestos:

- Cuando así se haya previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204.
- **Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205.**

Así, la actual modificación solicitada del P.A. 2023-0-87, se encuadraría en el tenor del artículo 205 de la LCSP, dado que la misma no se encuentra establecida en el PCAP.

SEGUNDO.- El artículo 205 de la LCSP, señala que las modificaciones no previstas en el Pliego, solo podrán realizarse cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

- Que se encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo de este artículo.
- Que se limite a introducir variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

Conforme a lo establecido en el apartado 2, los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y cuando se cumplan los requisitos anteriores, serían:

- Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente contratados.
- **Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato.**
- Cuando las modificaciones no sean sustanciales.

A la vista de lo expuesto en el citado apartado 2, la modificación propuesta se encuadraría en el segundo supuesto, debiendo cumplir acumulativamente las tres condiciones siguientes:

1. Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever.
2. Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
3. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

La modificación contractual se justifica no solo por la naturaleza estacional de la gripe, sino por la

fuerte y excepcional incidencia epidémica observada en la presente temporada, que supera los picos registrados en los últimos años y ha implicado un notable aumento de infecciones respiratorias agudas. Según los últimos datos del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA) del Instituto de Salud Carlos III, la tasa de síndrome gripal en España ha alcanzado 164,6 casos por cada 100 000 habitantes, superando los máximos de las tres últimas temporadas y mostrando un incremento exponencial, con especial afectación en los grupos de edad pediátricos y juveniles.

Estas cifras reflejan una presión real sobre los servicios sanitarios y una demanda diagnóstica que no podía preverse con precisión al momento de la licitación, aun actuando con diligencia administrativa. La variabilidad interanual de la incidencia gripal, su capacidad de causar brotes de mayor gravedad y la estrecha correlación entre diagnóstico rápido y manejo clínico eficaz hacen que la modificación del contrato sea una medida sanitaria y administrativa necesaria para asegurar la adecuada atención clínica, la gestión eficiente de recursos hospitalarios y la protección de la salud pública.

En consecuencia, la modificación propuesta responde a circunstancias epidemiológicas extraordinarias e imprevisibles, cumpliendo con los supuestos normativos para la adecuada adaptación de medios contractuales frente a situaciones no previstas inicialmente.

Asimismo, hacer hincapié en que han surgido circunstancias que, para una Administración diligente, no podían preverse. La incidencia de la gripe es estacional, por lo que resulta imprevisible que el Hospital Universitario La Paz pudiera anticipar su gravedad y entendiendo que la modificación propuesta obedece a circunstancias imposibles de prever por la Administración al tiempo de la licitación, se cumpliría, con el primer requisito.

En cuanto al segundo de los requisitos exigidos por la Ley, que la modificación no altere la naturaleza global del contrato, ***“la alteración de la naturaleza global del contrato tiene lugar cuando se cambian de modo sustancial las prestaciones que constituían su objeto primigenio o cuando se cambia la naturaleza del contrato, que pasaría a ser de otro tipo distinto del que se licitó inicialmente”***, conclusión a la que llega la Junta Consultiva de Contratación del Estado en la consulta formulada con nº de expediente: 28/2018. También pueden citarse, con el mismo sentido, la STSJ de Andalucía de 30 de julio de 2003, o el STSJ de Canarias de 1 de marzo de 1999.

Asimismo, el Informe SJ: 98/2021 de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid (Consejería de Presidencia) expone que *“(...) el criterio de la naturaleza global no hace referencia exactamente a la naturaleza del contrato, sino a características esenciales del procedimiento de contratación que se ha realizado previamente. En estos términos, se alterará la naturaleza global del contrato si se introducen variaciones en aquellos elementos que de modo más decisivo han condicionado el desarrollo del procedimiento de contratación desde la perspectiva tanto del número de las ofertas recibidas como de su contenido. A juicio de parte de la doctrina, ello sucederá, cuando se rebasen determinados límites cuantitativos, o cuando se altere el equilibrio*

del contrato en favor del contratista. Concluyendo, cuando la norma exige que no se altere la naturaleza global del contrato lo que veda es que mediante su modificación se altere de modo sustancial las prestaciones que constituían su objeto primigenio, en tal medida, que introduzcan variaciones en aquellos elementos que de modo más decisivo han condicionado el desarrollo del procedimiento de contratación desde la perspectiva tanto del número de las ofertas recibidas como de su contenido (...)”

Así, en referencia al objeto de la presente modificación, la ampliación del alcance del presente procedimiento abierto, vigente, no altera de modo sustancial las prestaciones, que siguen siendo las mismas, no introduce variación en un elemento que de modo decisivo hubiera determinado una mayor concurrencia en el procedimiento de licitación, ni produce desequilibrio alguno a favor del contratista. Por lo que, se cumple el segundo requisito, la modificación pretendida no altera la naturaleza global del contrato.

En cuanto al tercero de los requisitos, que la cuantía del contrato no aumente, aislada o juntamente con otras modificaciones del 50% de su precio inicial. Tal y como resulta de la memoria justificativa aportada al expediente, la modificación determina una variación que supone un 50% sobre el precio de adjudicación.

De acuerdo con el artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la modificación contractual propuesta supone un incremento del precio del contrato que no excede el porcentaje máximo permitido respecto al precio inicial (50%), cumpliendo así con los requisitos legales de proporcionalidad, necesidad y justificación objetiva.

Por todo lo anteriormente expuesto, se cumplen los requisitos exigidos en el referido art.205.2 b) de la LCSP. Por lo que una vez determinada la observancia de la primera condición del art. 205.1. a) de la LCSP, quedaría por verificar la segunda, recogida en el art. 205.1b) del mismo texto legal. La modificación propuesta, responde a la exigencia de **“una variación estrictamente indispensable para responder a la causa objetiva que la haga necesaria”** dado que, la presente modificación del contrato se justifica por una variación indispensable en sentido estricto para dar respuesta a una causa objetiva sobrevenida, consistente en el incremento extraordinario e inesperado de la incidencia de infecciones respiratorias, que ha generado un aumento exponencial de solicitudes de determinaciones PCR.

La ampliación propuesta se considera necesaria, proporcionada y justificada, al tratarse de una circunstancia que no podía preverse en el momento de la adjudicación y que resulta imprescindible para garantizar la adecuada prestación del servicio asistencial del Hospital.

TERCERO.- Indicar que, entre las prerrogativas de las Administraciones Públicas en la contratación pública, está la llamada *potestas variandi* o potestad de modificación del contrato; así se recoge en el artículo 190 LCSP “Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos

*señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, **modificarlos por razones de interés público**, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar la resolución y determinar los efectos de esta”*

La jurisprudencia ha indicado que este ius variandi, constituye un poder de la Administración para adaptar los contratos a las necesidades públicas, de manera que es el interés general el que debe prevalecer en todo caso. (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 1978).

Al respecto, cabe poner de manifiesto que el objeto de la presente modificación, no prevista tiene como fin exclusivo la satisfacción del interés general, consistente en hacer frente a la epidemia estacional de gripe y garantizar la adecuada prestación del servicio asistencial del Hospital Universitario La Paz. Esta circunstancia constituye una necesidad objetiva sobrevenida, estrictamente vinculada al cumplimiento del interés público, que no podía preverse en el momento de la adjudicación inicial. Por tanto, la modificación propuesta se considera necesaria, proporcionada y justificada, en los términos del artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al tratarse de una variación contractual estrictamente indispensable para atender a una causa objetiva que la hace necesaria.

En consecuencia con todo lo anterior

RESUELVE

PRIMERO.- Acordar la modificación del procedimiento abierto 2023-0-87 (Lote 2) que tiene por objeto el “*suministro del material necesario para la realización de determinaciones analíticas de detección de virus respiratorios mediante PCR en tiempo real en el Servicio de Microbiología del Hospital Universitario La Paz*” en base al tenor del artículo 205.2 b), y a favor de la contratista CEPHEID IBERIA, S.L.U. por un importe de CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (IVA incluido) **(415.635,00 euros)** hasta fin de ejecución del contrato.

SEGUNDO.- Proceder al reajuste de la garantía definitiva por parte de la contratista CEPHEID IBERIA, S.L.U. en base al artículo 109.3 de la Ley 9/2017 por un importe adicional de 17.175,00 euros.

TERCERO. – Declarar que la presente modificación surtirá efectos a partir del día siguiente al de la firma de la adenda al contrato por las partes firmantes.

CUARTO. - Dar la adecuada publicidad a esta resolución de modificación de contrato a través de su publicación en la Plataforma de Contratos del Sector Público.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de su notificación, según lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en concreto, ante Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 y en el artículo 9.1.c de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, no pudiendo interponerse simultáneamente ambos recursos.

EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: PEREZ-SANTAMARINA FEJOO RAFAELFERNANDO
Fecha: 2026 01 19 16:54